

Informe de Colombia

Os presentamos el informe de Colombia. Texto base de la intervención del compañero David Moreno, representante de la FECODE, y que por su contenido creemos de interés para todos nuestros lectores. A menudo no contamos con realidades como las que aquí nos relata.

La Federación Colombiana de Educadores es la organización sindical que agrupa al 95 por 100 de los educadores oficiales y, luego de un proceso intenso de unidad sindical, se ha convertido en la única organización existente que reúne 200.000 docentes de los niveles universitario, secundario, primario y preescolar de la educación estatal.

De unos años para acá hemos comenzado a preocuparnos por las relaciones internacionales con las organizaciones de trabajadores del mundo y, en particular, con las del sector educativo. Nuestra Federación no está afiliada a ninguna de las confederaciones mundiales de educadores; pero estamos interesados en mantener los más estrechos lazos de unidad con todas ellas. Somos parte de la Confederación de Educadores de América, «CEA», la cual realizará su Congreso en Bogotá, Colombia, los días 23, 24 y 25 de noviembre del presente año. De igual manera, hemos comenzado a participar en eventos internacionales que tienden a unificar a los trabajadores contra los flagelos de la deuda externa y las imposiciones de los organismos económicos internacionales que asfixian nuestras economías y reducen el nivel de vida de los pobladores. Por ello, somos partícipes de la convocatoria al II Encuentro Latinoamericano contra la deuda externa, por la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos, que se realizará en Colombia los días 24, 25 y 26 de noviembre del año en curso.

En nuestro país asistimos al recrudecimiento de la violencia que ha conducido a la organización de ejércitos para-militares financiados por el narcotráfico y dirigidos por algunas individualidades del ejército colombiano que han ocasionado la muerte de millares de compatriotas, entre quienes se encuentran dirigentes sindicales, populares, activistas políticos, religiosos, trabajadores del arte y la cultura y defensores de los derechos humanos. Los educadores hemos sido víctima de esta guerra sucia y en sólo tres años nos han asesinado 113 compañeros, de los cuales, diecisiete corresponden a los cinco meses transcurridos de este año. Igualmente, es frecuente en nuestro país la modalidad de la desaparición forzada en la que intervienen los organismos paramilitares, y, en muchos de los casos, las propias fuerzas armadas oficiales. En un corto período han sido desaparecidos quince educadores, de los cuales, la opinión pública internacional tuvo conocimiento de la reciente desaparición del dirigente de los maestros del Departamento de Santander, Isidro Caballero, por quien hicimos una campaña de solidaridad internacional reclamando su aparición con vida, lo cual no ha sido posible hacer realidad. En dicha campaña mostrábamos cómo existen evidencias de que el compañero fue secuestrado por las Fuerzas Militares de Colombia y hoy nadie da razón de su paradero. Expresamos nuestra gratitud por la participación en esta campaña internacional, a todas las organizaciones que nos acompañaron en ella.

Son millares los pobladores colombianos que hoy se encuentran bajo la amenaza de muerte. Distintos mecanismos utilizan para esta amenaza, desde el hostigamiento permanente hasta las llamadas telefónicas y el envío de sufragios «lamentando» el «fallecimiento» del amenazado. Son ya cerca de mil los educadores que se encuentran en esta situación. Esto ha conducido a que existan zonas del país donde es prácticamente

imposible que exista la organización sindical por cuanto o los activistas han sido obligados a salir de su sitio de trabajo o el terror y la amenaza hacen que los docentes abandonen la actividad sindical.

Frente a la situación de violencia que sufre el país, nuestra Federación como parte de la Central Unitaria de Trabajadores, «CUT», ha venido participando en las diferentes actividades tendientes a buscar un clima de convivencia donde se respeten las ideas y se dé una vida democrática. Por ello, vamos a participar de la realización del Congreso de Damnificados de la Guerra Sucia, convocado por el Comité Permanente de los Derechos Humanos, la Central Unitaria de Trabajadores y los organismos de defensa de la vida, que se reunirá en Bogotá el próximo mes de julio del 21 al 23. Igualmente, participaremos en el evento que el Tribunal Permanente de los Pueblos, organización reconocida como entidad consultiva por la ONU y la UNESCO, ha programado en Colombia una sesión sobre la impunidad de crímenes contra la humanidad en América Latina.

En Colombia asistimos a un proceso de negación de las mínimas libertades sindicales. Ante las reclamaciones de los trabajadores y las acciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores y demás sectores del movimiento sindical, el Gobierno de Barco ha respondido con unas medidas de guerra que impiden la expresión del movimiento sindical. Estas medidas se manifiestan en despidos, cancelaciones de personerías jurídicas, órdenes de arresto para quienes promuevan la actividad sindical, todas ellas contempladas en decretos dictatoriales amparados en el Estado de Sitio.

La situación de los trabajadores colombianos, y dentro de ellos los educadores, es de una angustia permanente por el sistemático recorte de las mínimas condiciones de vida a que se ve sometido por la política laboral y económica del Gobierno Nacional, quien fielmente se ha ajustado a los planes e imposiciones del Fondo Monetario Internacional y demás entidades prestamistas. Esto ha conducido a una política de congelación salarial con la imposición de reajustes que no compensan el alza en el costo de la vida, al recorte de garantías y conquistas prestacionales y al detrimento del servicio de la salud.

La educación en Colombia atraviesa por una de las peores crisis, al igual que los demás servicios esenciales que debe prestar el Estado, sufre la permanente reducción de la inversión pública.

La nación se ha venido descargando de su responsabilidad financiera con la prestación de los servicios esenciales, trasladando sus costos a las comunidades, todo ello con el propósito de asegurar cumplidamente el pago del servicio de la Deuda Externa, cuyo monto hoy se acerca a los veinte mil millones de dólares y su servicio anual acerca de mil setecientos millones de dólares.

Desde 1979, la Nación congeló la nómina de maestros oficiales, conduciendo a que las localidades se vean en la obligación de vincular docentes de manera temporal, negándoles los derechos salariales y prestacionales que tienen los educadores vinculados a la planta del Ministerio de Educación Nacional. Las instalaciones de los planteles educativos sufren un permanente deterioro, sin que el Estado se apropie de ellos, llevándolos a que no tengan las mínimas condiciones para el desarrollo de la labor educativa. Asimismo, es total la ausencia de materiales de ayudas educativas y de un plan coherente de capacitación de los educadores. Al momento, la Nación tiene una deuda que sobrepasa los 100.000 millones de pesos, (300 millones de dólares) por concepto de prestaciones sociales con los educadores, que se ha venido acumulando en los últimos quince años.

El magisterio colombiano se encuentra en un proceso de movilización tendente a conseguir del Gobierno Nacional la expedición de un Régimen Nacional de Prestaciones, que defina las prestaciones sociales de los educadores, las responsabilidades financieras

de la Nación, los mecanismos de pago de la deuda y la entidad encargada de prestarle el servicio a los educadores.

Igualmente enfrentamos la política de falsa descentralización educativa que pretende desarrollar el Gobierno Nacional y que tiene como propósito generar nuevas cargas económicas a las localidades al tiempo que desconocer garantías laborales conquistadas por los educadores. Objetivo central de nuestra lucha es la defensa de la vida, tanto en la exigencia al Gobierno de una política de desmonte de los grupos paramilitares, como la exigencia de medidas concretas que obliguen al Estado a responder por el mantenimiento de las familias de los educadores asesinados.

A raíz de la declaratoria del paro de setenta y dos horas del 19, 20 y 21 de abril, pactamos con el Gobierno en cabeza de su ministro de Hacienda y con el aval del presidente Barco, unos criterios básicos para realizar la negociación tendente a solucionar los problemas planteados. En nuestro plan de trabajo hemos definido la toma de la capital de la República por parte del magisterio colombiano hacia la segunda semana de agosto y nos aprestamos a la realización del Paro Nacional Indefinido, si el Gobierno no materializa favorablemente los acuerdos logrados.

La Federación Colombiana de Educadores, que ha sido el instrumento fundamental de lucha por la defensa de los derechos profesionales, salariales y prestacionales de los educadores, desde 1982 y luego de un diagnóstico de la crisis del sector educativo ha venido levantando con sus propios recursos una alternativa que hemos denominado el Movimiento Pedagógico. Este consiste en que, a pesar de las dificultades laborales de los educadores propiciadas por la política del Estado, rescatar la labor del educador hacia una educación humana y de formación de un hombre nuevo.

En desarrollo de este proyecto hemos realizado el Foro Nacional en Defensa de la Educación Pública en 1984, en el que participaron al lado de los educadores, funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, dirigentes de las distintas vertientes políticas, Centros de Investigación, Universidades y Centros de Formación Pedagógica.

En 1987 realizamos el II Congreso Pedagógico Nacional, en el que pudimos constatar un sinnúmero de experiencias pedagógicas que vienen desarrollando los educadores a lo largo y ancho de la patria. En él contamos con la presencia del presidente de la República, en su instalación, así como un conjunto de personalidades, organizaciones, funcionarios que tienen que ver con la educación pública.

Como expresión del Movimiento Pedagógico, estamos editando regularmente la revista «Educación y Cultura», que hoy se ha convertido en la de mayor tiraje en el país; en ella buscamos recoger los puntos de vista, investigaciones, que se vienen produciendo. Igualmente, hemos conformado el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes «CEID», como el organismo centralizador del Movimiento Pedagógico, actualmente se viene gestando un proceso de organización regional con la conformación de los CEID regionales.

En el corto tiempo de desarrollo del proyecto pedagógico, hemos podido responder a las distintas políticas que en materia educativa ha trazado el Estado, tales como la Renovación Curricular, la Promoción Automática, la Escuela Nueva.

Bogotá, D. E.

24 de mayo de 1989